



**CONVENIO SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE
INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU Y EL REINO DE
LOS PAISES BAJOS**

El Gobierno de la República del Perú

y

el Gobierno del Reino de los Países Bajos,

en adelante denominados las Partes Contratantes,

Deseando fortalecer los tradicionales lazos de amistad entre ambos países, extender e intensificar sus relaciones económicas, particularmente en lo que se refiere a las inversiones por parte de los nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante,

Reconociendo que un Convenio sobre el tratamiento a ser acordado a tales inversiones estimulará el flujo de capital y tecnología, así como el desarrollo económico de las Partes Contratantes y que es deseable un tratamiento justo y equitativo de las inversiones,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Para los fines del presente Convenio:

- a. El término "inversiones" comprenderá toda clase de activo y en particular, aunque no exclusivamente:
 - i. la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho real con respecto a toda clase de activo;

- ii. los derechos derivados de acciones, títulos y otras formas de participación en sociedades y "joint ventures";
 - iii. los derechos sobre dinero y otros activos, y a cualquier otra prestación que tenga valor económico;
 - iv. los derechos de propiedad intelectual e industrial (tales como derechos de autor, patentes, modelos y diseños industriales, marcas comerciales o de servicio, y nombres comerciales), procedimientos técnicos, derechos de llave y conocimientos tecnológicos;
 - v. los derechos otorgados por la ley pública, incluyendo derechos a prospección, exploración, extracción y explotación de recursos naturales.
- b. El término "nacionales" comprenderá para cualquiera de las Partes Contratantes a:
- i. las personas naturales que posean la nacionalidad de esa Parte Contratante de conformidad con su legislación;
 - ii. sin perjuicio de las disposiciones que se indican en iii., las personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante;
 - iii. las personas jurídicas, donde quiera que se encuentren localizadas, controladas, directa o indirectamente, por nacionales de esa Parte Contratante.
- c. El término "territorio" incluye las áreas marítimas adyacentes a la costa del Estado en cuestión, hasta el punto en que ese Estado puede ejercer derechos soberanos o jurisdicción en esas áreas de conformidad con su Constitución y el Derecho Internacional.



Artículo 2

Cada una de las Partes Contratantes promoverá, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, la cooperación económica a través de la protección en su territorio de las inversiones realizadas por nacionales de la otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante admitirá tales inversiones con sujeción a su derecho de ejercer las facultades conferidas por sus leyes o reglamentos.

Artículo 3

1. Cada Parte Contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante y no dificultará, con medidas arbitrarias o discriminatorias, el funcionamiento, la administración, el mantenimiento, el uso, el usufructo o la disposición de aquéllas por dichos nacionales.

2. Más específicamente, cada Parte Contratante acordará a tales inversiones plena seguridad y protección que en cualquier caso no será menor que la acordada ya sea a las inversiones de sus propios nacionales o a las inversiones de los nacionales de cualquier tercer Estado, considerándose la que sea más favorable al nacional interesado.

3. Si una Parte Contratante acuerda ventajas especiales a nacionales de cualquier tercer Estado en virtud de acuerdos estableciendo uniones aduaneras, uniones económicas o instituciones similares, o sobre la base de acuerdos provisionales que conduzcan a tales uniones o instituciones, esa Parte Contratante no estará obligada a acordar tales ventajas a los nacionales de la otra Parte Contratante.

4. Cada Parte Contratante cumplirá cualquier obligación que haya contraído con respecto a las inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante.

5. Si las disposiciones legales de cualquiera de las Partes Contratantes o las obligaciones conforme al Derecho Internacional vigentes actualmente o que se establezcan posteriormente entre las Partes Contratantes en adición al presente Convenio, contienen una norma, ya sea general o específica, dando derecho a las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante a un tratamiento más favorable que el otorgado por el presente Convenio, tal norma prevalecerá sobre el presente Convenio en lo que sea más favorable.

Artículo 4

Con respecto a los impuestos, tasas, cargas, deducciones y exenciones fiscales, cada Parte Contratante acordará a los nacionales de la otra Parte Contratante que estén realizando una actividad económica en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios nacionales o a aquéllos de cualquier tercer Estado, siendo aplicable el que sea más favorable para los nacionales interesados. Sin embargo, para este fin no se tomará en cuenta ningún tipo de ventaja fiscal especial acordada por esa Parte Contratante bajo un acuerdo para evitar la doble imposición, en virtud de su participación en una unión aduanera, unión económica o instituciones similares, o sobre la base de la reciprocidad con un tercer Estado.

Artículo 5

Las Partes Contratantes garantizarán que los pagos relacionados con una inversión puedan ser transferidos. Las transferencias serán efectuadas

en una moneda libremente convertible, sin restricción o demora indebida.

Tales transferencias incluyen en particular aunque no exclusivamente:

- a. utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;
- b. fondos necesarios
 - i. para la adquisición de materias primas o secundarias, productos semi-manufacturados o finales, o
 - ii. para reemplazar bienes de capital con el fin de salvaguardar la continuidad de una inversión;
- c. fondos adicionales necesarios para el desarrollo de una inversión;
- d. fondos para el pago de préstamos;
- e. regalías u honorarios;
- f. ingresos de personas naturales;
- g. el producto de la venta o liquidación de la inversión;
- h. pagos conforme al artículo 7 del presente Convenio.

Artículo 6

Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas que priven, directa o indirectamente, de sus inversiones a los nacionales de la otra Parte Contratante, a menos que se cumpla con las condiciones siguientes:

- a. que las medidas sean tomadas por razones de necesidad y utilidad pública, y de acuerdo con el debido procedimiento legal;
- b. que las medidas no sean discriminatorias o contrarias a cualquier otra actividad que la anterior Parte Contratante haya emprendido;
- c. que las medidas estén acompañadas de estipulaciones para el pago de una compensación justa. Tal compensación representará el valor real de las inversiones afectadas y, para ser hecha efectiva por los reclamantes, deberá ser abonada y transferible sin demora indebida, al país designado por los reclamantes en cuestión y en la moneda del país del cual los reclamantes son nacionales o en cualquier otra moneda libremente convertible y aceptada por los reclamantes.

Artículo 7

Los nacionales de una Parte Contratante que sufran pérdidas con relación a sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante debido a una guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o levantamiento, recibirán, por parte de esta última Parte Contratante, un tratamiento que permita la restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, no menos favorable que el que esa Parte Contratante acuerde a sus propios nacionales o a nacionales de cualquier tercer Estado, siendo aplicable el que sea más favorable para los nacionales en cuestión.

Artículo 8

Si las inversiones de un nacional de una Parte Contratante están aseguradas contra riesgos no comerciales bajo un procedimiento establecido por ley, cualquier subrogación del asegurador o reasegurador en los derechos del citado nacional conforme a los términos de tal seguro, será reconocida por la otra Parte Contratante.

Artículo 9

Cualquier controversia entre una Parte Contratante y un nacional de la otra Parte Contratante relativa a una inversión de ese nacional en el territorio de la primera Parte Contratante, será en lo posible, solucionada amistosamente. Cada Parte Contratante acepta someter tales controversias, si ellas no pueden ser solucionadas en un período de tres meses contados desde la fecha en que cualquier parte haya solicitado la solución amistosa, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para el arreglo a través de la conciliación o arbitraje, bajo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965. Una persona jurídica que es

incorporada o constituida conforme a la ley vigente en el territorio de una Parte Contratante y en la cual, antes que tal controversia se produzca, la mayoría de acciones son propiedad de nacionales de la otra Parte Contratante, será tratada, de conformidad con el artículo 25 (2)(b) de la Convención, para los fines de la Convención, como una compañía de la otra Parte Contratante.

Artículo 10

Desde la fecha de su entrada en vigor, las disposiciones de este Convenio se aplicarán también a todas las inversiones realizadas por nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante que hayan sido hechas, antes o después de su entrada en vigor, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la última Parte Contratante, en vigencia al momento en que fueron hechas tales inversiones.

Artículo 11

Con respecto al Reino de los Países Bajos, el presente Convenio se aplicará a la parte del Reino ubicada en Europa, a las Antillas Holandesas y a Aruba, a menos que la notificación estipulada por el artículo 14, párrafo (1) disponga lo contrario.

Artículo 12

Cualquiera de las Partes Contratantes puede proponer a la otra parte que se efectúen consultas sobre cualquier asunto relativo a la interpretación o aplicación del Convenio. La otra parte acordará la debida consideración y creará las condiciones adecuadas para que dichas consultas se realicen.

Artículo 13

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, que no pueda ser dirimida dentro de un plazo razonable por medio de negociaciones diplomáticas, será sometida, salvo que las partes hayan acordado lo contrario, a pedido de cualquiera de las partes, a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así designados nombrarán conjuntamente a un tercer árbitro que actuará como Presidente y que no será nacional de ninguna de las partes.

2. Si una de las partes no cumple con nombrar su árbitro y no ha procedido a hacerlo dentro de un plazo de dos meses luego de haber recibido la invitación de la otra parte para hacer ese nombramiento, esta última parte podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que haga el nombramiento necesario.

3. En el caso que ambos árbitros no logren llegar a un acuerdo sobre la elección del tercer árbitro dentro de los dos meses siguientes a su nombramiento, cualquiera de las dos Partes podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que realice la designación correspondiente.

4. Si, en los casos estipulados en los párrafos 2. y 3. del presente artículo, al Presidente de la Corte Internacional de Justicia no se le permite realizar dicha función, o es nacional de cualquiera de las dos Partes Contratantes, se invitará al Vicepresidente para que lleve a cabo el nombramiento necesario. En el caso que el Vicepresidente se vea impedido de ejercer dicha función o sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, se invitará al miembro más antiguo de la Corte, que no sea nacional de cualquiera de las dos partes, para que realice los nombramientos necesarios.

5. El tribunal decidirá sobre la base del respeto al derecho. Antes de decidir, en cualquier estado del procedimiento el tribunal podrá proponer a las partes que la controversia sea resuelta en forma amistosa. Las disposiciones que anteceden no perjudicarán la facultad del tribunal para decidir la controversia ex aequo et bono, si las Partes así lo acuerdan.

6. A menos que las partes decidan lo contrario, el tribunal determinará su propio procedimiento.

7. El tribunal tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será irrevocable y obligatoria para las partes.

8. Ninguna de las Partes Contratantes otorgará protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y la otra Parte Contratante hayan sometido a un tribunal arbitral internacional competente, conforme a lo previsto en el artículo 9 del presente Convenio, salvo que la otra Parte Contratante no acate o deje de cumplir la decisión de dicho tribunal arbitral.

Artículo 14

1. El presente Convenio entrará en vigencia el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en la que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente y por escrito que el procedimiento constitucional requerido en sus respectivos países se ha cumplido, y tendrá validez por un período de quince años.

2. A menos que cualquiera de las Partes Contratantes haya recibido aviso de terminación del Convenio por lo menos con seis meses de anticipación de la fecha de expiración de su validez, el presente Convenio podrá extenderse tácitamente por períodos de diez años y cada Parte Contratante se reserva el derecho de terminar el Convenio previa notificación, por lo menos de seis meses antes de la fecha de expiración del actual período de validez.

3. Respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de terminación del presente Convenio, los artículos precedentes continuarán en vigencia por un período posterior de quince años, a partir de esa fecha.

4. Respecto al período mencionado en el párrafo 2. de este artículo, el Gobierno del Reino de los Países Bajos tendrá derecho a terminar la aplicación del presente Convenio, en forma independiente, con relación a cualquiera de las partes del Reino.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, han suscrito el presente Convenio.

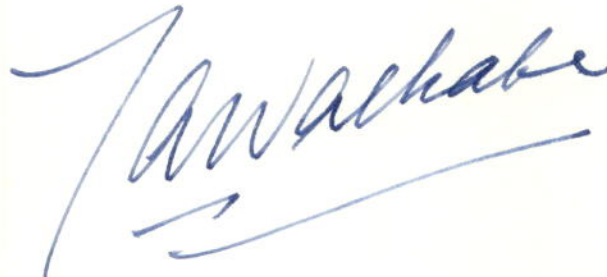
HECHO en duplicado en *Lima* el *27 de Diciembre de 1994*,
en los idiomas holandés, castellano e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencia de interpretación prevalecerá el texto en inglés.

Por el Gobierno de
la República del Perú



EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER,
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno del
Reino de los Países Bajos



JAAP A. WALKATE,
Embajador de Los Países Bajos

**VERDRAG TUSSEN DE REPUBLIEK PERU EN HET KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN INZAKE DE BEVORDERING EN DE WEDERZIJDSE
BESCHERMING VAN INVESTERINGEN**

De Regering van de Republiek Peru
en
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

hierna aangeduid als de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens de van oudsher tussen hun landen bestaande
vriendschapsbanden te versterken, de economische betrekkingen tussen
hen uit te breiden en te intensiveren, met name wat investeringen door de
onderdanen van de ene Verdragsluitende Partij op het grondgebied van de
andere Verdragsluitende Partij betreft,

In het besef dat overeenstemming omtrent de aan dergelijke inves-
teringen toe te kennen behandeling het kapitaalverkeer en de overdracht
van technologie tussen, alsmede de economische ontwikkeling van de
Verdragsluitende Partijen zal stimuleren, en dat een eerlijke en rechtvaardige
behandeling van investeringen wenselijk is,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag:

- a. omvat de term "investeringen": alle soorten vermogensbestand-
delen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

- i. roerende en onroerende zaken, alsmede alle andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen;
 - ii. rechten ontleend aan aandelen, obligaties en andere soorten belangen in ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen;
 - iii. recht op geld, op andere vermogensbestanddelen of op iedere prestatie die economische waarde heeft;
 - iv. rechten op het gebied van de intellectuele en de industriële eigendom (zoals auteursrechten, octrooien, industriële ontwerpen en modellen, handelsmerken of dienstmerken, en handelsnamen), technische werkwijzen, goodwill en know-how;
 - v. rechten verleend krachtens het publiekrecht, met inbegrip van rechten tot het opsporen, exploreren, ontginnen en winnen van natuurlijke rijkdommen;
- b. omvat de term "onderdanen" met betrekking tot elk van beide Verdragsluitende Partijen:
- i. natuurlijke personen die de nationaliteit van die Verdragsluitende Partij hebben in overeenstemming met haar recht;
 - ii. onverminderd de bepalingen van iii. hieronder, rechtspersonen die zijn opgericht krachtens het recht van die Verdragsluitende Partij;
 - iii. rechtspersonen, ongeacht waar zij gelegen zijn, die onder al dan niet rechtstreeks toezicht staan van onderdanen van die Verdragsluitende Partij;
- c. omvat de term "grondgebied" mede de zeegebieden grenzend aan de kust van de betrokken Staat, voor zover die Staat overeenkomstig zijn grondwet en het internationale recht soevereine rechten of rechtsmacht in deze gebieden uitoefent.



Artikel 2

Elke Verdragsluitende Partij bevordert, binnen het kader van haar wetten en voorschriften, de economische samenwerking door middel van de bescherming op haar grondgebied van investeringen van onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij. Met inachtneming van het recht van elke Verdragsluitende Partij de door haar wetten of voorschriften verleende bevoegdheden uit te oefenen, laat elke Verdragsluitende Partij dergelijke investeringen toe.

Artikel 3

1. Elke Verdragsluitende Partij waarborgt een eerlijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen van onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij en belemmert niet, door onredelijke of discriminatoire maatregelen, de werking, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de vervreemding daarvan door deze onderdanen.

2. Meer in het bijzonder kent elke Verdragsluitende Partij aan dergelijke investeringen volledige zekerheid en bescherming toe, die in elk geval niet minder gunstig is dan die welke wordt toegekend aan investeringen van haar eigen onderdanen of aan investeringen van onderdanen van derde Staten, naar gelang van wat het gunstigst is voor de betrokken onderdaan.


3. Indien een Verdragsluitende Partij aan onderdanen van derde Staten bijzondere voordelen toekent uit hoofde van verdragen tot oprichting van douane-unies, economische unies of soortgelijke instellingen, dan wel op grond van interim-verdragen die tot zodanige unies of instellingen leiden, is die Verdragsluitende Partij niet verplicht zodanige voordelen toe te kennen aan onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij.

4. Elke Verdragsluitende Partij komt alle verplichtingen na die zij is aangegaan met betrekking tot investeringen van onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij.

5. Indien naast dit Verdrag de wettelijke bepalingen van één van beide Verdragsluitende Partijen of verplichtingen krachtens het internationale recht die thans tussen de Verdragsluitende Partijen bestaan of op een later tijdstip worden aangegaan een algemene of bijzondere regeling bevatten op grond waarvan investeringen door onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij aanspraak kunnen maken op een behandeling die gunstiger is dan in dit Verdrag is voorzien, heeft een dergelijke regeling, in zoverre zij gunstiger is, voorrang boven dit Verdrag.

Artikel 4

Met betrekking tot belastingen, heffingen, lasten en verminderingen en vrijstellingen van belasting kent elke Verdragsluitende Partij aan onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij die zich op haar grondgebied met economische activiteiten bezighouden, een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke wordt toegekend aan haar eigen onderdanen of aan die van derde Staten, naar gelang van wat het gunstigst is voor de betrokken onderdanen. Hierbij wordt evenwel geen rekening gehouden met bijzondere belastingvoordelen door die Partij toegekend krachtens een verdrag ter vermijding van dubbele belasting, uit hoofde van haar deelneming aan een douane-unie, economische unie of soortgelijke instelling, of op basis van wederkerigheid met een derde Staat.




Artikel 5

De Verdragsluitende Partijen waarborgen dat betalingen die verband houden met een investering kunnen worden overgemaakt. De overmakingen geschieden in vrij inwisselbare valuta, zonder onnodige beperking of vertraging. Deze overmakingen omvatten in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

- a. winsten, rente, dividenden en andere lopende inkomsten;
- b. gelden nodig
 - i. voor het verwerven van grondstoffen of hulpmaterialen, halffabrikaten of eindprodukten, of
 - ii. om kapitaalgoederen te vervangen ten einde de continuïteit van een investering te waarborgen;
- c. bijkomende gelden nodig voor de ontwikkeling van een investering;
- d. gelden voor de terugbetaling van leningen;
- e. royalty's of honoraria;
- f. inkomsten van natuurlijke personen;
- g. de opbrengst van de verkoop of liquidatie van de investering;
- h. betalingen ingevolge artikel 7 van dit Verdrag.

Artikel 6

Geen der Verdragsluitende Partijen neemt maatregelen waardoor direct of indirect aan onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij hun investeringen worden ontnomen, tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a. de maatregelen worden genomen in het algemeen belang en met inachtneming van een behoorlijke rechtsgang;
 - b. de maatregelen zijn niet discriminatoir of in strijd met enige verbintenis die de eerstbedoelde Verdragsluitende Partij is aangegaan;
- 

- c. de maatregelen gaan vergezeld van een regeling voor de betaling van een billijke schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling dient overeen te komen met de werkelijke waarde van de desbetreffende investeringen en dient, wil zij doeltreffend zijn voor de gerechtigden, zonder onnodige vertraging te worden betaald en te kunnen worden overgemaakt naar het door de betrokken gerechtigden aangewezen land en in de valuta van het land waarvan de gerechtigden onderdaan zijn of in een door de gerechtigden aanvaarde vrij inwisselbare valuta.

Artikel 7

Aan onderdanen van de ene Verdragsluitende Partij die verliezen lijden met betrekking tot hun investeringen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een nationale noodtoestand, opstand, oproer of rellen, wordt door de laatstbedoelde Verdragsluitende Partij wat restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of een andere regeling betreft, geen minder gunstige behandeling toegekend dan die welke die Verdragsluitende Partij toekent aan haar eigen onderdanen of aan onderdanen van derde Staten, naar gelang van wat het gunstigst is voor de betrokken onderdanen.

Artikel 8

Indien de investeringen van een onderdaan van de ene Verdragsluitende Partij verzekerd zijn tegen niet-commerciële risico's krachtens een bij wet ingesteld stelsel, wordt de subrogatie van de verzekeraar of de herverzekeraar in de rechten van de bedoelde onderdaan ingevolge de voorwaarden van deze verzekering door de andere Verdragsluitende Partij erkend.

Artikel 9

Geschillen tussen de ene Verdragsluitende Partij en onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij betreffende investeringen van die onderdanen op het grondgebied van de eerstbedoelde Verdragsluitende Partij worden, indien mogelijk, in der minne geschikt. Elke Verdragsluitende Partij stemt ermee in dergelijke geschillen, indien ze niet kunnen worden beslecht binnen een tijdvak van 3 maanden na de datum waarop een van beide partijen om een minnelijke schikking heeft verzocht, voor te leggen aan het Internationale Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen ter beslechting door bemiddeling of arbitrage krachtens het Verdrag inzake de beslechting van investeringsgeschillen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, dat op 18 maart 1965 te Washington werd opengesteld voor ondertekening.

Een rechtspersoon die is opgericht of gesticht krachtens het op het grondgebied van de ene Verdragsluitende Partij geldende recht en waarin, voordat een dergelijk geschil ontstaat, het merendeel van de aandelen eigendom is van onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij, wordt in overeenstemming met artikel 25, tweede lid, letter b, van het Verdrag van Washington voor de toepassing van dat Verdrag behandeld als een onderneming van de andere Verdragsluitende Partij.

Artikel 10

De bepalingen van dit Verdrag zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag ook van toepassing op alle investeringen van onderdanen van de ene Verdragsluitende Partij op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij die, voor dan wel na de inwerkingtreding van het Verdrag, zijn gedaan in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de laatstbedoelde Partij zoals van kracht op het tijdstip waarop de investeringen werden gedaan.



Artikel 11

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden is dit Verdrag van toepassing op het deel van het Rijk in Europa, de Nederlandse Antillen en Aruba, tenzij anders is bepaald in de in artikel 14, eerste lid, bedoelde mededeling.

Artikel 12

Elk der Verdragsluitende Partijen kan aan de andere Partij voorstellen overleg te plegen over een aangelegenheid betreffende de uitlegging of toepassing van dit Verdrag. De andere Partij staat welwillend tegenover en biedt passende gelegenheid voor een dergelijk overleg.

Artikel 13

1. Geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen betreffende de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag die niet binnen een redelijke tijdspanne door middel van diplomatieke onderhandelingen kunnen worden beslecht, worden, tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, op verzoek van één van beide Partijen voorgelegd aan een uit drie leden samengesteld scheidsgerecht. Elke Partij benoemt één scheidsman en de aldus benoemde scheidsmannen benoemen te zamen een derde scheidsman, die geen onderdaan van een der Partijen is, tot hun voorzitter.

2. Indien één van beide Partijen nalaat haar scheidsman te benoemen en indien zij geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de andere Partij binnen twee maanden tot deze benoeming over te gaan, kan de laatstbedoelde Partij de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming te verrichten.

3. Indien de beide scheidsmannen niet binnen twee maanden na hun benoeming tot overeenstemming kunnen geraken over de keuze van de derde scheidsman, kan elk der Partijen de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming te verrichten.

4. Indien in de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde gevallen de President van het Internationale Gerechtshof verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, of onderdaan is van één van beide Verdragsluitende Partijen, wordt de Vice-President verzocht de noodzakelijke benoemingen te verrichten. Indien de Vice-President verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, of onderdaan is van één van beide Partijen, wordt het lid van het Gerechtshof dat het hoogst in anciënniteit is, beschikbaar is en geen onderdaan is van één der Partijen, verzocht de noodzakelijke benoemingen te verrichten.

5. Het scheidsgerecht doet uitspraak op basis van eerbiediging van het recht. Alvorens uitspraak te doen, kan het scheidsgerecht in elke fase van het geding een minnelijke schikking van het geschil aan de Partijen voorstellen. De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van het scheidsgerecht in het geschil een uitspraak ex aequo et bono te doen, indien de Partijen daarmee instemmen.

6. Tenzij de Partijen anders beslissen, stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedureregels vast.

7. Het scheidsgerecht doet zijn uitspraak bij meerderheid van stemmen. Een zodanige uitspraak is onherroepelijk en bindend voor de Partijen.

8. Geen van beide Verdragsluitende Partijen verleent diplomatieke bescherming of stelt een internationale vordering in met betrekking tot een

geschil dat door een van haar onderdanen en de andere Verdragsluitende Partij worden voorgelegd aan een bevoegd internationaal scheidsgerecht zoals voorzien in artikel 9 van dit Verdrag, tenzij die andere Verdragsluitende Partij zich niet schikt naar de in een dergelijk geschil gedane uitspraak en deze niet naleeft.

Artikel 14

1. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de in hun onderscheiden landen vereiste grondwettelijke procedures is voldaan, en blijft van kracht voor een tijdvak van vijftien jaar.

2. Tenzij ten minste zes maanden voor de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur door een van beide Verdragsluitende Partijen mededeling van beëindiging is gedaan, wordt dit Verdrag telkens stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van tien jaar, waarbij elke Verdragsluitende Partij zich het recht voorbehoudt dit Verdrag te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden voor de datum van het verstrijken van de lopende termijn van geldigheid.

3. Ten aanzien van investeringen die zijn gedaan voor de datum van beëindiging van dit Verdrag, blijven de voorgaande artikelen van kracht gedurende een tijdvak van vijftien jaar vanaf die datum.

4. Met inachtneming van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn is de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gerechtigd de toepassing van dit Verdrag ten aanzien van elk deel van het Koninkrijk afzonderlijk te beëindigen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers,
daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben
ondertekend.

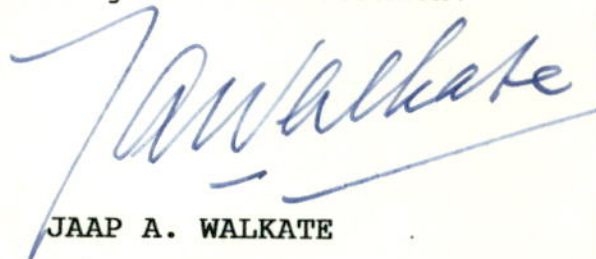
GEDAAN in tweevoud te *Lima* op *27 december 1994* in
de Spaanse, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde de drie
teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in
uitlegging is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van
de Republiek Peru:



EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Minister-President en Minister
van Buitenlandse Zaken

Voor de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden:



JAAP A. WALKATE
Buitengewoon en
Gevolmachtigd Ambassadeur

**AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF
INVESTMENTS BETWEEN THE REPUBLIC OF PERU AND
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS**

The Government of the Republic of Peru
and
the Government of the Kingdom of the Netherlands,

hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Desiring to strengthen the traditional ties of friendship between their countries, to extend and intensify the economic relations between them particularly with respect to investments by the nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

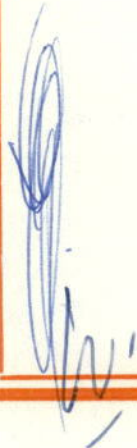
Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Contracting Parties and that fair and equitable treatment of investment is desirable,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of the present Agreement:

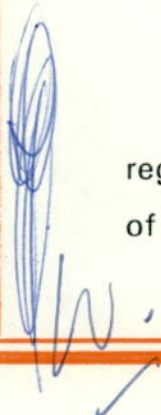
- a) the term "investments" shall comprise every kind of asset and more particularly, though not exclusively:



- i) movable and immovable property as well as any other rights in rem in respect of every kind of asset;
 - ii) rights derived from shares, bonds and other kinds of interests in companies and joint ventures;
 - iii) title to money and other assets and to any performance having an economic value;
 - iv) intellectual and industrial property rights (such as copyrights, patents, industrial designs and models, trade or service marks and trade names), technical processes, goodwill and know-how;
 - v) rights granted under public law, including rights to prospect, explore, extract and win natural resources.
- b) the term "nationals" shall comprise with regard to either Contracting Party:
- i) natural persons having the nationality of that Contracting Party in accordance with its law;
 - ii) without prejudice to the provisions of (iii) hereafter, legal persons constituted under the law of that Contracting Party;
 - (iii) legal persons, wherever located, controlled, directly or indirectly, by nationals of that Contracting Party.
- c) the term "territory" includes the maritime areas adjacent to the coast of the State concerned, to the extent to which that State may exercise sovereign rights or jurisdiction in those areas in accordance with its Constitution and with international law.

Article 2

Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, promote economic cooperation through the protection in its territory of investments of nationals of the other Contracting Party. Subject to its right to



exercise powers conferred by its laws or regulations, each Contracting Party shall admit such investments.

Article 3

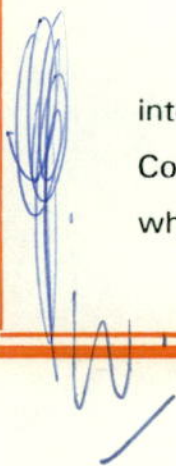
1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment to the investments of nationals of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those nationals.

2. More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments full security and protection which in any case shall not be less than that accorded either to investments of its own nationals or to investments of nationals of any third State, whichever is more favourable to the national concerned.

3. If a Contracting Party accords special advantages to nationals of any third State by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions or institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to nationals of the other Contracting Party.

4. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of nationals of the other Contracting Party.

5. If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by nationals of the other



Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement.

Article 4

With respect to taxes, fees, charges and to fiscal deductions and exemptions, each Contracting Party shall accord to nationals of the other Contracting Party who are engaged in any economic activity in its territory, treatment not less favourable than that accorded to its own nationals or to those of any third State, whichever is more favourable to the nationals concerned. For this purpose, however, there shall not be taken into account any special fiscal advantages accorded by that Party under an agreement for the avoidance of double taxation, by virtue of its participation in a customs union, economic union or similar institution, or on the basis of reciprocity with a third State.

Article 5

The Contracting Parties shall guarantee that payments related to an investment may be transferred. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without undue restriction or delay. Such transfers include in particular though not exclusively:

- a) profits, interest, dividends and other current income;
- b) funds necessary
 - i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or finished products, or
 - ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
- c) additional funds necessary for the development of an investment;

- d) funds in repayment of loans;
- e) royalties or fees;
- f) earnings of natural persons;
- g) the proceeds of sale or liquidation of the investment;
- h) payments pursuant to article 7 of this Agreement.

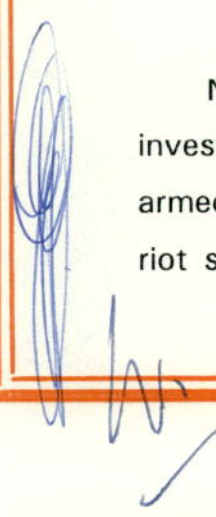
Article 6

Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, nationals of the other Contracting Party of their investments unless the following conditions are complied with:

- a) the measures are taken for reasons of public necessity and utility, and under due process of law;
- b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which the former Contracting Party may have given;
- c) the measures are accompanied by provision for the payment of just compensation. Such compensation shall represent the genuine value of the investments affected and shall, in order to be effective for the claimants, be paid and made transferable, without undue delay, to the country designated by the claimants concerned and in the currency of the country of which the claimants are nationals or in any freely convertible currency accepted by the claimants.

Article 7

Nationals of the one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards



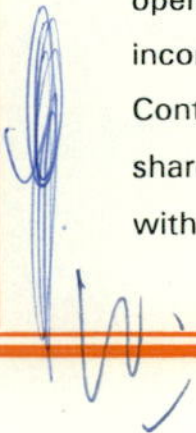
restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which that Contracting Party accords to its own nationals or to nationals of any third State, whichever is more favourable to the nationals concerned.

Article 8

If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or re-insurer into the rights of the said national pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party.

Article 9

Any dispute between one Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of the latter in the territory of the former shall, if possible, be settled amicably. If such a dispute cannot be settled within a period of 3 months from the date either party requested amicable settlement, each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965. A legal person which is incorporated or constituted under the law in force in the territory of one Contracting Party and in which before such a dispute arises the majority of shares are owned by nationals of the other Contracting Party shall in accordance with Article 25 (2) (b) of the Convention be treated for the purposes of the



Convention as a company of the other Contracting Party.

Article 10

The provisions of this Agreement shall, from the date of entry into force thereof, apply to all investments by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party which are, whether before or after its entry into force, made in accordance with the laws and regulations of the latter Contracting Party in force at the time the investments were made.

Article 11

As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and to Aruba, unless the notification provided for in Article 14, paragraph (1) provides otherwise.

Article 12

Either Contracting Party may propose the other Party to consult on any matter concerning the interpretation or application of the Agreement.

The other Party shall accord sympathetic consideration to and shall afford adequate opportunity for such consultation.

Article 13

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of the present Agreement, which cannot be settled within a reasonable lapse of time, by means of diplomatic negotiations, shall,

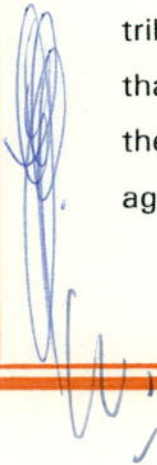
unless the Parties have otherwise agreed, be submitted, at the request of either Party, to an arbitral tribunal, composed of three members. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall together appoint a third arbitrator as their chairman who is not a national of either Party.

2. If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within two months after an invitation from the other Party to make such appointment, the latter Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

3. If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following their appointment, on the choice of the third arbitrator, either Party may invite the President of the International Court of Justice, to make the necessary appointment.

4. If, in the cases provided for in the paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from discharging the said function or is a national of either Contracting Party, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is prevented from discharging the said function or is a national of either Party the most senior member of the Court available who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.

5. The tribunal shall decide on the basis of respect for the law. Before the tribunal decides, it may at any stage of the proceedings propose to the Parties that the dispute be settled amicably. The foregoing provisions shall not prejudice the power of the tribunal to decide the dispute *ex aequo et bono* if the Parties so agree.



6. Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

7. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on the Parties.

8. Neither Contracting Party shall give diplomatic protection or bring an international claim with respect to a dispute which one of its nationals and the other Contracting Party have submitted to a competent international arbitral tribunal as provided for in Article 9 of this Agreement, unless such other Contracting Party does not abide by and comply with the award rendered in such dispute.

Article 14

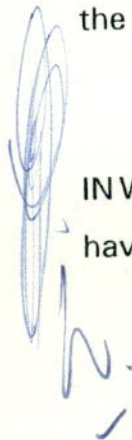
1. The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have informed each other in writing that the procedures constitutionally required therefor in their respective countries have been complied with, and shall remain in force for a period of fifteen years.

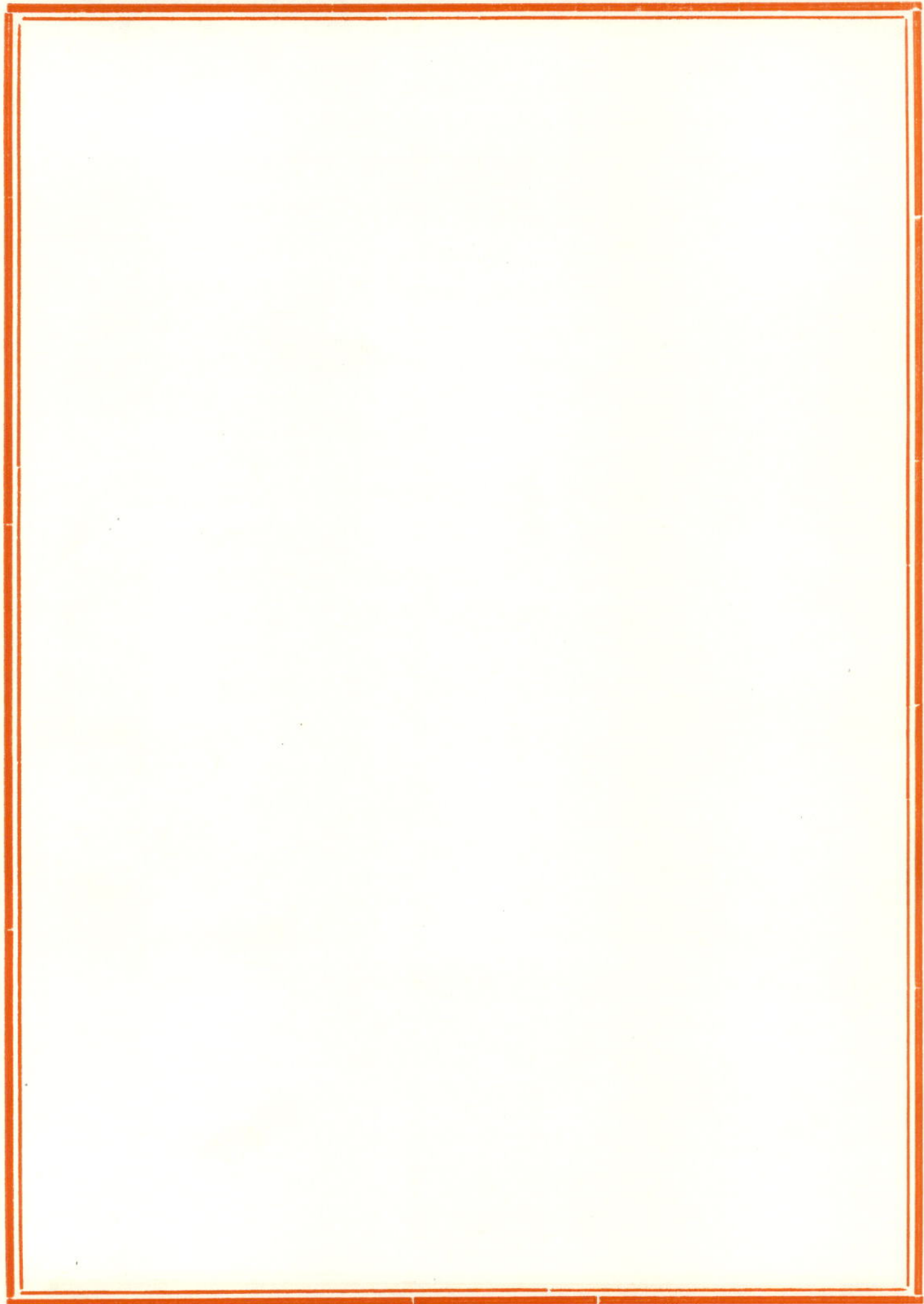
2. Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six months before the date of the expiry of its validity, the present Agreement shall be extended tacitly for periods of ten years, each Contracting Party reserving the right to terminate the Agreement upon notice of at least six months before the date of expiry of the current period of validity.



3. In respect of investments made before the date of the termination of the present Agreement the foregoing Articles thereof shall continue to be effective for a further period of fifteen years from that date.

4. Subject to the period mentioned in paragraph (2) of this Article, the Government of the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to terminate the application of the present Agreement separately in respect of any of the parts of the Kingdom.

 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed the present Agreement.



DONE in duplicate at *Lima* on *December 27, 1994* ,
in the Spanish, Dutch and English languages, the three texts being equally
authentic. In case of difference of interpretation the English text will prevail.

For the Government of
the Republic of Peru:



EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Prime-Minister and Minister for
Foreign Affairs

For the Government of the
Kingdom of the Netherlands:



JAAP A. WALKATE
Embassador extraordinary and
plenipotentiary

